

## **REPÚBLICA DE COLOMBIA**



### **RAMA JUDICIAL**

### **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**

**Medellín, veintiséis (26) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)**

La Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario laboral instaurado por GERARDO ANTONIO SÁNCHEZ MARÍN contra la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES (Radicado 05001-31-05-022-2020-00212-01).

### **ANTECEDENTES:**

El demandante pretende el reconocimiento y pago del retroactivo pensional desde el 15 de febrero de 2017 al 01 de octubre de 2019, junto con los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas del proceso.

Como sustento de sus pretensiones, manifestó que nació el 15 de febrero de 1955 por lo que alcanzó los 62 años en el año 2017, acreditando un total de 1.558 semanas de cotización. Efectuó reclamación administrativa para el reconocimiento de su pensión de vejez el 06 de marzo de 2019, la que fue negada por Resolución SUB 127175 del 22 de mayo de 2019 por no contar con el tiempo suficiente, acto que fue recurrido el 13 de junio de 2019 y por resolución SUB 272310 de 2019 concedió el derecho sin tener en

cuenta todas las semanas ni otorgar retroactivo, el que también fue negado por acto administrativo DPE 11232 de 2019.

La entidad convocada dio respuesta oportuna al libelo con aceptación de todos los fundamentos fácticos expuestos, pero con oposición a lo pedido, por considerar que en razón de no reportarse la novedad de retiro el retroactivo pensional perseguido no es procedente. Como excepciones de mérito formuló las que denominó inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, prescripción, improcedencia de la indexación, improcedencia de la condena en costas y compensación.

El Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, surtido el trámite de rigor, profirió sentencia el 28 de septiembre de 2022, oportunidad en la que **CONDENÓ** a Colpensiones a reconocer y pagar al demandante el valor de \$35.210.391 por concepto de retroactivo pensional calculado entre el 15 de febrero de 2017 y el 30 de septiembre de 2019, previos descuentos por salud. **CONDENÓ** a Colpensiones a reconocer los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del 06 de julio de 2019 y hasta el pago efectivo de la obligación. **CONDENÓ** en costas a la demandada, fijando las agencias en derecho en la suma de \$2.640.779.

Colpensiones se apartó parcialmente de la determinación, señalando no ser procedentes los intereses moratorios condenados, toda vez que el no reconocimiento del retroactivo pensional se debió a la ausencia de acreditación de la novedad de retiro, no siendo viable que la entidad actué en contra de la ley y sus reglamentos, además que la mora solo se produce desde se produce el pago de mesadas y se materializa el reconocimiento lo que no opera en esta oportunidad, mismos que se causan luego de transcurridos seis meses desde que es radicada la solicitud respectiva.

La Sala en el marco de lo que regula el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conoce también del asunto por el grado de consulta en favor de Colpensiones en los puntos no recurridos.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

Lo primero que debe decirse es que la generalidad de los hechos de la demanda no está en controversia, en tanto de la prueba documental queda claro que el demandante nació el 15 de febrero de 1955 (Pág. 9 Archivo 03); que fue pensionado por vejez mediante la Resolución SUB 272310 de 2019 a partir del 01 de octubre de 2019, en cuantía inicial de \$1.088.824 bajo los postulados de la Ley 797 de 2003 sin reconocimiento de retroactivo alguno, efectuándose su pago a corte de nómina (Pág. 22 y ss Archivo 03).

Dejando de lado tales presupuestos, el objeto del debate se circunscribe a determinar si a la promotora del proceso le asiste el derecho al retroactivo pensional; de ser el caso, a partir de qué fecha se debe liquidar; y si son procedentes los intereses moratorios, así como las costas procesales.

Pues bien, para abordar el asunto debe acudir a la postura que tiene asentada de vieja data la Jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral donde se ha advertido que son dos momentos diferentes los referidos a la causación y el disfrute del derecho a la pensión de vejez, en clara aplicación de los artículos 13 y 35 del Decreto 758 de 1990, entendiendo por la primera aquel instante en que el afiliado cumple con los requisitos exigidos por la norma, esto es, edad y semanas cotizadas y/o tiempo servido; mientras que el segundo, hace relación al evento a partir del cual éste se desafilia del sistema con el fin de iniciar el goce de su pensión de vejez.

Sobre esta materia, en especial sobre las exigencias de desafiliación o retiro del sistema para dar paso al disfrute de la pensión de vejez, debe dejarse claro que si bien es cierto que se tiene como premisa fundamental para adquirir el derecho a este el reporte de la novedad de retiro de parte de quien fungió como empleador, debe anotarse en igual medida que, si este último incurre en tal omisión no es plausible trasladar en el afiliado las consecuencias y afectaciones de lo que ese actuar implica, lo que quiere decir, que ante la falta de diligencia por parte del dador del empleo para proceder con la desafiliación del Sistema de quien fue su colaborador, no es posible incurrir en la vulneración de los derechos adquiridos del afiliado, como ocurriría en el evento de no reconocer las mesadas causadas desde el momento de la satisfacción de las exigencias mínimas dispuestas por el legislador, aun cuando el afiliado exterioriza su voluntad de no continuar amparado para los riesgos invalidez, vejez o muerte en el sistema general de seguridad social en pensiones, manifestación que bien puede ser expresa, reportando la novedad de retiro; o tácita, mediante actos que así lo den a entender.

Sobre el alcance y sentido de los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, la Alta Corporación en nuestra especialidad ha adocinado que cuando no se cuente con el acto formal de desafiliación, deben examinarse las circunstancias fácticas del caso, a fin de determinar en qué momento debe entenderse que el afiliado desiste de su afiliación al sistema pensional y se hace exigible la mesada causada, como ocurre cuando se da la finalización del vínculo laboral con el afiliado, o se presenta una ausencia en el pago de cotizaciones, y es concomitante el cumplimiento de los requisitos en materia de edad y de cotizaciones, con lo que no se deja duda de la intención del afiliado de cesar su vinculación al sistema en procura de la obtención del derecho pensional (Ver Rdo. 38776 del 1 de febrero de 2011, SL4611-2015, SL5603-2016, SL9036-2017, SL900-2018, SL3310-2022 y SL1619-2023).

En el asunto, el historial laboral del demandante que fue arribado por

Colpensiones (Archivo 12), en efecto no muestra el reporte expreso de su último empleador “*Arquitectura dinámica S.A.S*” de la novedad de retiro, ni tampoco se visualiza la novedad “P”, que valga decir, se surte cuando un afiliado cree haber cumplido con los requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez pero éste derecho aún no ha sido declarado por parte de la administradora de pensiones, y por tanto no está obligado a pagar las cotizaciones al Sistema General de Pensiones aunque la relación laboral se mantenga, pero sí se está en presencia de diversas circunstancias de donde se deriva su intención inequívoca de retirarse del sistema, así formalmente no exista una novedad de desafiliación, manifestada mediante actos externos e inequívocos como la suspensión definitiva de los aportes en pensión desde enero de 2017, la que sumada a la reclamación de la prestación elevada el 06 de marzo de 2019 (Pág. 10-11 Archivo 03) por virtud del cumplimiento de los requerimientos de edad y semanas desde 2017 tal y como se evidencia del mismo acto administrativo que refirió como fecha de estatus el 15 de febrero de 2017, dan cuenta del ánimo incuestionable de cesar su pertenencia al Sistema como afiliado, parámetros que se tornan en válidos para establecer la fecha de inicio del disfrute de su pensión.

Desde lo expuesto, se tiene que a partir de las muestras innegables de la voluntad del afiliado de desvincularse definitivamente del Sistema General de Pensiones, se tiene que la fecha de disfrute, acaeció a partir del 15 de febrero de 2017 cuando cumplió el último de los requisitos exigidos -edad- y ya había dejado de lados los aportes al sistema pensional, resultando en esos términos acertada la decisión del *a quo* cuando procedió con el reconocimiento del retroactivo perseguido a partir de esa data, y hasta el 30 de septiembre de 2019, que se constituye en el día anterior al que se hizo el ingreso en nómina de parte de la administradora, concepto que asciende a la suma de \$35.176.610 como se detalla a continuación, que resulta ser en poco superior a la ordenada en la sentencia que se revisa, la que es susceptible de ser modificada por virtud de la consulta en favor de la entidad demandada, suma de la que habrán de descontarse los aportes

en salud correspondientes.

AÑO	IPC	VR. MESADA	Nº MESADA	TOTAL
2017	4,09%	\$ 1.013.802	11,5	\$ 11.658.723
2018	3,18%	\$ 1.055.267	13	\$ 13.718.471
2019	3,80%	\$ 1.088.824	9	\$ 9.799.416
				\$ 35.176.610

Estos guarismos no estuvieron afectados por el fenómeno de la prescripción en tanto la definición del derecho pensional se efectuó por acto administrativo del 02 de octubre de 2019 notificada el 11 del mismo mes y año (Pág.21 Archivo 03) previa reclamación efectuada el 06 de marzo de 2019 (Págs. 10-11 Archivo 03), siendo promovida la demanda el 13 de julio de 2020 (Archivo 01), sin que haya transcurrido el término trienal establecido en los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

Respecto a la condena de los intereses moratorios, debe recordarse que la Corporación ha sostenido que, conforme al artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por regla general resultan procedentes ante el retardo en el pago de las mesadas pensionales, ya que buscan resarcir los efectos adversos que la mora del deudor produce al acreedor y que de forma excepcional no se genera su imposición pero solo en aquellos eventos en que: i) existe disputa o incertidumbre respecto de los posibles beneficiarios o titulares del derecho pensional; ii) cuando se trata de una reliquidación pensional; iii) cuando las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer la pensión tienen plena justificación porque encuentran respaldo normativo; iv) cuando el reconocimiento deviene de un cambio de criterio jurisprudencial (Ver SL3947-2020, SL2790 de 2022 y SL1878 de 2023).

En ese orden, se aprecia que en el asunto aunque se trata de la aplicación de un criterio jurisprudencial, este es de vieja data cuya aplicación se suple desde hace más de una década, por lo que estando ante situaciones y actos inequívocos de desafiliación no se hace posible justificar el no pago de mesadas o su reconocimiento de manera tardía, lo que a su vez no permite

que ante estos eventos se exonere a la administradora de este medio resarcitorio, por lo que en virtud del artículo 9 de la ley 797 de 2003, la enjuiciada tenía un plazo de 4 meses contados a partir de la presentación de la radicación de solicitud administrativa para resolver y pagar las mesadas pensionales debidamente causadas, no de 6 meses como lo pregonaba la recurrente, en tanto tal término venía dispuesto por la Ley 700 de 2001 en su artículo 4°, cobrando vigor la nueva normativa. De ese modo, como quiera que la reclamación de la prestación se efectuó el 06 de marzo de 2019, es desde ese momento que deben contabilizarse los términos de la mora, encontrando que la entidad demandada está obligada a reconocer intereses a partir del 07 de julio de 2019 y hasta tanto se materialice el pago de lo condenado, para lo cual habrá de tenerse en cuenta la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago, fecha inicial que en favor de Colpensiones habrá de ser modificado.

En lo que atañe a las costas procesales impuestas a Colpensiones, debe señalarse que tal rubro es procedente en la forma ordenada, en tanto se trata de una imposición bajo criterios objetivos a cargo de quien fue vencido en juicio conforme lo pregonaba el numeral 1° del artículo 365 del CGP, ya que tales rubros no supeditan su reconocimiento a una actuación subjetiva, sino exclusivamente a los resultados del proceso, siendo una consecuencia procesal del ejercicio de acción, y claramente frente al demandante a Colpensiones le fue resuelta la Litis desfavorablemente (Ver SL947-2021 y AL471-2018). Y es que la finalidad de las costas procesales es cubrir las erogaciones económicas que comportan la atención de un proceso judicial, por lo que teniendo absoluta injerencia Colpensiones en el derecho concedido, los gastos del polo activo dentro de este trámite deben ser asumidos por el extremo pasivo.

En conclusión, de todo lo dicho, y sin necesidad de otro tipo de argumentaciones, la sentencia venida en apelación se habrá de modificar en cuanto a la fecha a partir de la que deben reconocerse los intereses moratorios, debiendo confirmarse en lo demás.

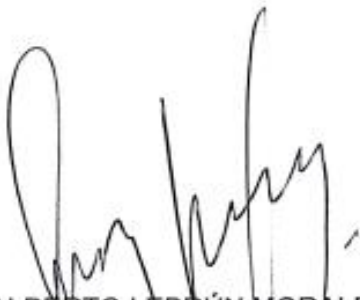
Conforme a lo que pregona el artículo 365 del CGP, las costas en esta instancia estarán a cargo de Colpensiones, fijándose las agencias en derecho en la suma de \$2.000.000.

### DECISIÓN

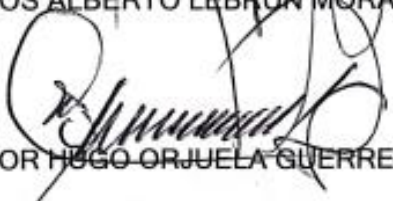
En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **MODIFICA** la sentencia objeto de apelación, de fecha y procedencia conocidas, en el sentido de ordenar a cargo de Colpensiones el reconocimiento de intereses moratorios a partir del 07 de julio de 2019. **CONFIRMA** en lo demás. Las costas son como quedó dicho en la parte motiva.

Notifíquese por EDICTO.


Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE



**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA  
EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

**Radicación:** 05001310502220200021201  
**Proceso:** ORDINARIO LABORAL  
**Demandante:** GERARDO ANTONIO SANCHEZ MARIN  
**Demandado:** COLPENSIONES  
**M. P.** CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES  
**Fecha de fallo:** 26/09/2023  
**Decisión:** CONFIRMA Y MODIFICA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 27/09/2023 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**

Secretario